LA HOJA DE COCA EN CHILE: Análisis de su estatus legal en base a casos de estudio

Mayo, 2025
Claudia Levine
Fundación Lobeliana

*****

Este trabajo analiza el estatus legal de la hoja de coca en Chile, a partir de la normativa legal vigente, en específico la Ley 20.000 sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes y su correspondiente reglamento, las normas de protección indígena que inciden en la materia y la exposición de dos casos de detención y encarcelamiento de personas indígenas por portar y transportar hoja de coca en estado seco. Legalmente la hoja de coca se considera una droga ilícita en Chile, sin embargo, por circunstancias culturales su uso conlleva una cierta tolerancia punitiva, lo que ha derivado en un tratamiento legal especial diverso al resto de las drogas prohibidas en nuestro país. En el artículo se distingue entre los usuarios de hoja de coca que son indígenas y aquellos sujetos que no lo son, profundizando en las consecuencias penales de ambos sujetos, advirtiéndose un sistema diferenciado de aplicación de la ley según el mismo criterio.

Introducción

A pesar de que la hoja de coca en Chile está prohibida, es usual ver en el comercio minorista e informal del país, y especialmente en el norte de Chile, la venta de hojas de coca (*Erythroxylum coca*) en pequeñas cantidades. No sólo su uso en picchar¹ es una cuestión pública y notoria, sino también se utiliza medicinalmente o en el contexto de festividades y celebraciones religiosas, incluso también como ofrenda (*pagos* o *despachos*). Además, el sincretismo religioso entre las culturas indígenas y la población chilena, ha extendido el uso de la hoja de coca al ciudadano no indígena, produciéndose un fenómeno de aculturación, siendo el picchado de hoja de coca una costumbre que va en aumento a lo largo de todo el país.

Esta tolerancia estatal a la hoja de coca, a pesar de estar prohibida, no sólo se debe a la fuerte y arraigada costumbre de los pueblos indígenas que efectivamente viven en Chile y la utilizan, sino que ha encontrado protección jurídica en diversos cuerpos normativos vigentes en el país, que veremos a lo largo de este artículo, tendientes a garantizar el libre desarrollo de las culturas indígenas y sus costumbres. Sin embargo, por condiciones ambientales, la hoja de coca no puede cultivarse en Chile, ya que crece en bosques húmedos y subtropicales, que distan de asimilarse al árido desierto del altiplano chileno, por eso la hoja de coca se trae de Bolivia y de Perú. Y el problema es que para poder desarrollar su propia cultura (aymará, quechua y otras), lo que implica ritos, fiestas religiosas, ofrendas o uso medicinal, se requiere de un comercio de la hoja de coca, y si bien, usualmente no se somete a proceso jurisdiccional al pequeño vendedor de feria, suele detenerse y acusársele de tráfico de drogas al transportista que ingresa la hoja de coca a Chile en grandes cantidades. Ello, a pesar de que el Servicio Agrícola Ganadero (SAG), órgano encargado del control fronterizo sanitario, permite formalmente su ingreso en su circular N°643/2019, este documento no indica la cantidad de hoja de

---

¹ Picchar, chacchar, acullicar o coquear hace referencia a lo que suele llamarse “masticar” o “mascar” hoja de coca. Sin embargo, el picchado (o sus otras denominaciones originarias mencionadas) no es lo mismo que “masticar” hoja, ya que la acción es más compleja: se introduce una cantidad de hoja de coca seca en la boca, luego se masca, luego se acumula en forma de bolo, comúnmente también se agrega un “activador” que es una sustancia alcalina (como es el bicarbonato de sodio o también una mixtura de cenizas de origen vegetal o animal), luego se ubica en un carrillo y se deja ahí de forma de “ensalivarse” en el tiempo. En este artículo decidimos usar la palabra picchar ya que es más precisa que masticar y es además comúnmente usada por comunidades indígenas en el norte de Chile.

coca permitida. En la práctica, en el control fronterizo, si es una cantidad que el “funcionario policial de turno” considera “alta”, se le detiene, si la considera “baja” no se le detiene. Y si el transportista no declara que lleva hoja de coca y lo sorprenden, también se le detiene, limitándose el SAG sólo a realizar un control sanitario y quedando a discreción del policía de turno iniciar o no un procedimiento penal en el caso concreto. Esto genera en el paso fronterizo una inseguridad e incerteza jurídica, que se replica en los Tribunales de justicia de Chile. Jurisdiccionalmente si la cantidad de hoja de coca resulta para el juez “alta” se le castigará por tráfico, por el contrario, si la considera baja y el ciudadano es indígena, puede que se le exima de responsabilidad por aplicación de la normativa indígena que protege su identidad y costumbres. Ahora, si el sujeto afectado no es indígena, al no tener amparo legal basado en la costumbre del uso de esta planta, se le castigará por tráfico de drogas, generándose de esta forma en Chile, un sistema doble de aplicación de la ley, según si se trata de un ciudadano indígena o no indígena.

Las drogas más incautadas por la policía en Chile los últimos años es la *Cannabis sativa*, la cocaína base o pasta base y el clorhidrato de cocaína, incrementándose en los últimos años la ketamina. Los casos de incautación de hoja de coca en Chile son pocos, por ende, no existe una jurisprudencia amplia sobre la materia, y la que existe, recae en general en el transportista de la hoja de coca, cuyo destino judicial dependerá de si es o no un ciudadano indígena, como como veremos a continuación.

Ciudadano Indígena

El 20 diciembre de 2006 el Juzgado de Garantía de Calama² dio orden de ingreso a la cárcel de dicha ciudad a dos mujeres indígenas quechua parlantes que migraron del altiplano boliviano a vivir a la ciudad chilena de Calama, quienes fueron detenidas por portar en la vía pública entre sus pertenencias 5 kilos 440 gramos de hoja de coca cuyo destino era su uso en la fiesta de la Virgen del Rosario de Cosca a celebrarse el 25 de diciembre de 2006, como autoras del delito de tráfico ilícito de estupefacientes en grado de desarrollo consumado. Las mujeres estuvieron casi 6 meses privadas de libertad durante la tramitación de uno de los pocos casos cuyo resultado ha sido la absolución de las acusadas. Así fue como el Tribunal de Juicio Oral de Calama³, dictó sentencia absolutoria, pero no acogiendo los argumentos de la defensa en cuanto a que las acusadas estaban en una hipótesis de “error de prohibición” (desconocimiento de que se está cometiendo un delito o ignorancia de la ilicitud), sino que consideraron que:

“...las acusadas, no obstante realizar una conducta reprochable, lo hicieron siguiendo las formas y simbolismos propias de su cultura, lo que significa que ellas, en su conciencia y fuero interno, no tuvieron la intención de traficar las hojas de coca, sino entregárselas a una persona que, como creyente, las iba a utilizar en una festividad religiosa.”⁴

El Tribunal valora expresamente como algo evidente, el sincretismo religioso presente en el norte de Chile, y normativamente recurre al artículo 1⁵ de la Ley Indígena N°19.253 sosteniendo que en dicha en norma se efectúa un reconocimiento estatal de las comunidades indígenas, y que el artículo 54⁶ entrega los lineamientos para que la costumbre indígena constituya derecho. Es a partir de estas normas que el Tribunal entendió que el legislador chileno se ha hecho cargo de esta amalgama cultural, pues al reconocer a las comunidades indígenas, reconoce sus tradiciones y decide absolver sosteniendo que:

“... en la conciencia de las acusadas su conducta no resultaba atentatoria a derecho, ya que es habitual que en su etnia sea corriente que en este tipo de festividades se consuma y use las hojas de coca, lo que tiene gran importancia para el pueblo aymará tanto para su desarrollo cultural como para su idiosincrasia, máxime cuando aquello le es reconocido

---

² Causa RIT N°6240-2006, RUC N°0600900213-6 del Juzgado de Garantía de Calama.

³ Causa RIT N°66-2007, RUC N°0600900213-6 del Tribunal de Juicio Oral de Calama.

⁴ Considerando Décimo Octavo de la Sentencia absolutoria RIT N°66-2007, RUC N°0600900213-6 del Tribunal de Juicio Oral de Calama.

⁵ Ver sección Anexo

⁶ Ver sección Anexo

*legalmente, mediante las normas señaladas. En consecuencia, las acusadas actuaron creyendo equivocadamente que se encontraban amparadas en la causa de justificación del artículo 10 n°10 del Código Penal, por el ejercicio legítimo de un derecho, lo que obsta a la existencia de la conciencia de la ilicitud de su conducta, por lo que debe entenderse que su actuación en el hecho del juicio, con ser una acción típica y antijurídica, no es culpable, toda vez que falta el elemento de la conciencia de la ilicitud de su proceder, lo que en la especie, en relación a lo obrado por las acusadas, no se dio, por lo que al no existir la culpabilidad, componente aquella de ésta, no hay delito.”*⁷

El Ministerio Público, órgano estatal encargado de la persecución penal en Chile, presentó recurso de nulidad de esta sentencia por considerar que hubo una errónea aplicación del derecho. Dicho recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, quien además agregó en su fallo⁸ que en este caso se produce lo que en derecho Internacional Público se conoce como la “autoejecutividad de las convenciones”, ya que es aplicable por norma constitucional expresa el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos⁹ y su correlato en el art. 19 N°2 de la constitución Política, y que conforme a esas normas “*las minorías tienen incorporado a su patrimonio el derecho al trato no discriminatorio en forma amplia genérica para practicar su propia vida cultural, costumbres, ritos y usanzas cualquiera sea la nacionalidad de ellas.*”¹⁰ Por último en su considerando Octavo, la Corte agrega que rige de manera indesmentible el principio de primacía de la realidad en la comunidad residente en Calama y el altiplano de Bolivia, que determina el respeto y cultivo de tradiciones propias e intransferibles de su propia cultura y modo de amar y sentir la vida diaria.

Este caso no sólo fue novedoso, por ser uno de los pocos en los que se dicta sentencia absolutoria en un caso de defensa indígena en el contexto de tráfico de drogas. Destaca además, que el Tribunal aplicó la ley indígena a ciudadanas extranjeras, que invocó la ley indígena para efectos de poder absolver a las acusadas y el hecho de que la Corte de Apelaciones reiterara la aplicación de la ley indígena estableciendo de manera expresa la autoejecutividad de los tratados internacionales. Con ello, se auguraba un buen pronóstico para el futuro de casos relativos al porte, transporte y uso de hoja de coca en Chile, toda vez que el fallo da por establecido que las pocas leyes a esa fecha promulgadas relativas a la protección de indígenas, tenían no sólo aplicación directa, sino que su fuerza eximía de responsabilidad penal por ser un derecho de los pueblos indígenas utilizar hoja de coca en contextos religiosos. El Tribunal entendió que la conducta de las acusadas se enmarcaba en el ejercicio legítimo de un derecho, sin embargo, lo resuelto en este caso, dista de ser la práctica habitual de los tribunales de competencia penal chilenos.

A 17 años de este fallo, tiempo en el cual se aprobaron y promulgaron más leyes de protección indígena, el día 12 de mayo de 2023, el juzgado de Garantía de María Elena,¹¹ dio orden de ingreso a la cárcel de Calama, a dos hombres aymaras bolivianos que fueron formalizados como autores del delito de tráfico de drogas en grado consumado, al ser sorprendidos poseyendo y transportando en una camioneta, 113 kilos 850 gramos de hojas de coca que transportaban para vender en la feria de Calama a personas de su misma nacionalidad quienes la piccharan. Los imputados no tenían antecedentes penales, y estuvieron privados de libertad por esta causa 1 año y 5 meses aproximadamente.

Durante el tiempo que estuvieron presos, se solicitó en 7 oportunidades el cambio de medida cautelar por una menos gravosa, realizándose en todas esas oportunidades una defensa desde una perspectiva indígena tendiente a justificar la conducta argumentando la existencia del uso legítimo de un derecho, el error de prohibición y/o la ausencia de dolo. La defensa presentó antecedentes para acreditar que se trataba de personas aymaras, que se dedicaban al comercio minorista y que dicha venta iba dirigida a las personas de su cultura y a los chilenos que por una sincronía cultural religiosa han adquirido también estas costumbres, sin que hayan detenido a los imputados con ningún tipo de precursor para

---

⁷ Considerando Décimo Octavo de la Sentencia absolutoria RIT N°66-2007, RUC N°0600900213-6 del Tribunal de Juicio Oral de Calama.

⁸ Causa ROL N°250-2007 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta.

⁹ Ver sección Anexo

¹⁰ Considerando Séptimo causa ROL N°250-2007 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta.

¹¹ RIT 97-2023, RUC N°2300517067-2 del Juzgado de Garantía de María Elena

la elaboración de pasta base o cocaína, ni se hayan presentado indicios de que los imputados tenían la intención de producir droga y ponerla a disposición de la población. La defensa planteó que el derecho de los imputados a poder realizar sus costumbres y desarrollar su cultura se encuentra protegido por un bloque de normas destinadas específicamente a la protección de las garantías de los pueblos indígenas, a saber: a) el art. 27 del pacto internacional de derechos civiles y políticos; b) art. 54 Ley 19.253 normas sobre protección desarrollo indígena; c) el art. 40 de la declaración de las naciones unidas de los pueblos indígenas¹²; d) Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que entró en vigencia el 15 de septiembre de 2009 art. 2, 5 y art.8¹³.

En dos oportunidades, los alegatos se presentaron en la misma Corte de Apelaciones de Antofagasta que 17 años antes había absuelto a las dos mujeres, la cual decide mantener la prisión preventiva de los imputados básicamente porque no existían antecedentes que permitieran estimar que la gran cantidad de hojas de coca estaba destinada al uso cultural ancestral de los imputados y que dicha gran cantidad de sustancia iba a ser efectivamente expedida al menudeo en algún comercio local. Llama la atención, que en el primer fallo referido, el Tribunal y la Corte utilizaron sólo las normas referidas en las letras a) y b) mencionadas, en cambio en este segundo caso, se agregaron las referidas en las letras c) y d), normas que fueron aprobadas por Chile con posterioridad al 2006 y que debiesen reforzar la defensa indígena en este tipo de procesos. Los acusados, en virtud del mal pronóstico de un juicio oral y de la pena de cárcel que arriesgaban si ejercían su derecho a ir a juicio, entre 5 años y 1 día a 15 años, decidieron negociar con el Ministerio Público y aceptar a cambio de no ir a juicio, una condena de 3 años y 1 día de libertad vigilada intensiva y no privados de libertad. Algo muy similar ocurrió en la causa RIT N°86-2023 del mismo Juzgado de Garantía de María Elena, causa en la que a pesar de tratarse de ciudadanos indígenas y que el destino de la hoja iba dirigido al comercio minorista, los acusados deciden aceptar los hechos de las causas, a cambio de una pena de menor gravedad.

Como se indicó, el caso típico de detención por hoja de coca, es el del transportista. Y la respuesta judicial frente a esos casos es diversa según el Tribunal competente. En la causa RIT N°27-2015 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica, se trataba de 16 kilos, 850 gramos, y se absolvió porque se trató de un “error de prohibición”, ya que el acusado no dimensionó que el porte de la hoja de coca, podría ser constitutivo de delito, por ende, no actuó con un “dolo” de traficar. El Tribunal sostuvo que la cantidad de droga era baja y por ende inocua para afectar el bien jurídico protegido por la ley de drogas que es la salud pública. Pero en la causa RIT N°190-2012 del mismo Tribunal, se condenó al transportista de 57 kilos de hoja de coca por tráfico, por no existir error de prohibición y no haberse probado que ejercía un derecho legítimo, ya que no se acreditó el destino de las hojas de coca.

Como puede desprenderse, el ciudadano indígena que logra acreditar que pertenece a dicha comunidad, y que la hoja de coca será destinada al comercio minorista o al uso religioso, es susceptible de ser absuelto si el juez estima que la cantidad es baja. Sin embargo, si el juez considera que la cantidad de hoja de coca es alta, presumirá que es materia prima para la fabricación de cocaína o pasta base y la probabilidad de condena es alta, resultando irrelevante si es o no indígena, y por ende, no será protegido por el bloque de normas de protección indígena.

De ahí que en la causa RIT N°5440-2022 del 6 Juzgado de garantía de Santiago, un ciudadano boliviano de la cultura quechua, fue privado de libertad por 10 meses por poseer y transportar 500 kg de hoja de coca seca para su posterior venta a campesinos compatriotas en la zona de Chile Central. Si bien la cantidad representa una de las mayores incautaciones de material de esta planta en Chile, el número se justificaba para el picchado de 500 personas en dos meses de jornada laboral. El imputado aceptó un procedimiento abreviado por un periodo de libertad vigilada intensiva, ya que era extremadamente probable que sería condenado por tráfico de materia prima para la fabricación de cocaína, por la sola cantidad que poseía.

---

¹² Ver sección Anexo

¹³ Ver sección Anexo

En definitiva, judicialmente es la “cantidad” el criterio predominante (aunque no sea preciso) para distinguir entre el ejercicio legítimo de un derecho o un abuso del derecho, lo que deriva en una absolució n o una condena respectivamente, en los casos que se trate de un ciudadano indígena.

Ciudadano no indígena

El tratamiento legal penal más favorable y especial que provee la normativa indígena, dista del régimen legal que recae sobre quienes en las mismas circunstancias no son ciudadanos indígenas. Para la población no indígena, la hoja de coca está prohibida, y tiene el mismo tratamiento penal que cualquier otra droga considerada ilícita en Chile. El criterio para calificar una conducta como tráfico, tráfico en pequeñas cantidades o microtráfico y consumo, es principalmente “la cantidad de droga”. La determinación acerca de qué cantidad específica califica en qué tipo penal no se encuentra regulado en ningún cuerpo normativo, sino que ha quedado a juicio de los Tribunales de Justicia. Los Tribunales penales suelen fallar que hasta 10 gramos de droga se trata de un consumo, entre 10 y 100 gramos se trata de un delito de tráfico en pequeñas cantidades o microtráfico, y de 100 gramos en adelante se trataría de la figura de tráfico, cuestió n que como se dijo, queda a discreció n judicial, por ende, lo que es microtráfico en una región del país, puede no serlo en otra.

En cuanto al marco regulatorio, los delitos mencionados están establecidos en la Ley 20.000 sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes. Esta ley sanciona en su artículo 1 inciso 1 a quienes *elaboren, fabriquen, transformen, preparen o extraigan* sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas *productoras de dependencia física o síquica, capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud, sin la debida autorizació n.*

Y en el inciso 2 del mismo artículo, sanciona a quienes realicen las mismas conductas pero con otras drogas o sustancias de esta índole que *no produzcan los efectos indicados en el inciso anterior*, caso en el cual constituiría un delito menos grave.

Para saber qué drogas serían capaces de provocar efectos graves en la salud o no, debemos remitirnos al reglamento de la Ley 20.000, el Decreto N°867 de 19 de febrero del año 2008, que establece los listados de drogas prohibidas en Chile. En su artículo 1 enumera las sustancias referidas en el inciso primero de la Ley N°20.000 (que produzcan graves efectos), y en su artículo segundo enumera las sustancias referidas en el inciso segundo (que no produzcan graves efectos), lista en la cual encontramos a la hoja de coca.

La Ley 20.000 establece en el artículo 3 el delito de tráfico que recae en quienes sin contar con la autorizació n competente, *importen, exporten, transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren, guarden o porten* tales sustancias o materias primas, y en su artículo 4 el regula el delito de microtráfico que recae sobre quien sin la competente autorizació n *posea, transporte, guarde o porte consigo* pequeñas cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas, productoras de dependencia física o síquica, o de materias primas que sirvan para obtenerlas, sea que se trate de las indicadas en los incisos primero o segundo del artículo 1, a menos que justifique que están *destinadas a la atenció n de un tratamiento médico o a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo*. La norma sanciona también a quien *adquiera, transfiera, suministre o facilite* a cualquier título pequeñas cantidades de estas sustancias, drogas o materias primas, con el objetivo de que sean consumidas o usadas por otro.

De esta forma, analizando los verbos rectores de los delitos de tráfico en Chile, puede advertirse que el consumo personal de cualquier droga está permitido, ya sea para un tratamiento médico o a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, pero se prohíbe su adquisició n, su compra, su porte. De hecho el consumo también se encuentra regulado en el art. 50 de la Ley 20.000 que regula tres tipos de faltas penales por consumo, a saber: a) quienes *consumieren* alguna de las drogas o sustancias estupefacientes o sicotrópicas de que hace menció n el artículo 1, *en lugares públicos o abiertos al público, tales como calles, caminos, plazas, teatros, cines, hoteles, cafés, restaurantes, bares, estadios, centros de baile o de música; o en establecimientos educacionales o de capacitació n;* b) a quienes *tengan o porten* en tales lugares las drogas o sustancias antes indicadas para *su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo;* y c) a

quienes *consuman dichas drogas en lugares o recintos privados, si se hubiesen concertado para tal propósito*. Finaliza la norma disponiendo que se entenderá justificado *el uso, consumo, porte o tenencia* de alguna de dichas sustancias para la atención de un tratamiento médico.

Así, la única figura legalmente permitida de consumo de hoja de coca en Chile, al igual que cualquier otra droga considerada ilegal, es el “consumo personal de manera privada”, pero no es posible comprar la droga, portarla, suministrarla aunque sea para el uso o consumo personal y próximo en el tiempo. Puedes consumir, sólo y en un lugar privado.

Y la única forma legal de adquirir una droga prohibida en Chile, es a través de su cultivo, conducta que se encuentra regulada en el art. 8 de la Ley 20.000 y que exige dos cosas: autorización de cultivo del Servicio Agrícola Ganadero, y que el cultivo esté destinado a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, caso en el cual sólo se aplicarán las faltas penales de los artículos 50 y siguientes. Por último la norma da un tratamiento especial a la cannabis y entiende que se encuentra justificado su cultivo para la atención de un tratamiento médico, con la presentación de una receta médica.

Conclusión

La hoja de coca se considera una droga ilícita en Chile y por ende está prohibida, salvo en ciertas hipótesis dirigidas a su consumo personal. Sin embargo, dado que el uso de ella es un hecho público y notorio en el norte de Chile, dada la gran cantidad de población indígena, la policía no detiene a quienes portan, consumen públicamente o venden hoja de coca en pequeñas cantidades.

Quienes resultan afectados criminalmente son los transportistas que ingresan la hoja de coca al país, normalmente desde Perú o Bolivia. El transportista es una figura importante pues es quien en definitiva provee al mercado minorista, y de esa forma, permite el uso y consumo de una planta que para muchos es sagrada y representa un elemento fundamental en la cultura de personas que habitan el territorio chileno, lugar en el cual por razones ambientales no es posible cultivarla.

De los casos judiciales analizados, puede desprenderse que en Chile existe un sistema diferenciado de aplicación de la ley según si se trata de un ciudadano indígena o no indígena. Sólo quienes acreditan su procedencia indígena pueden o podrían lograr un resultado favorable penalmente en una causa de tráfico de drogas de hoja de coca, si se considera que la cantidad de droga permite presumir que no se trata de materia prima para la elaboración de otras drogas, por estar destinada a fines religiosos o al comercio minorista. Si bien la cantidad no está determinada en ningún cuerpo legal, de los casos analizados, puede desprenderse que una cantidad cercana a los 15 kilos, podría caer dentro de esa presunción. Cantidades mayores a eso, aunque se trate de un ciudadano indígena, se le considerará probablemente como un transportista de materia prima para la fabricación de cocaína o pasta base.

De esta forma, siendo “la cantidad de droga”, el factor determinante para determinar si la conducta se ampara en el derecho indígena o no, o para el caso del ciudadano no indígena, para determinar si es una hipótesis de consumo o de tráfico, este criterio cuantitativo no se encuentra regulado en ningún cuerpo legal y queda a discreción jurisdiccional.

A pesar de que en los últimos años se han aprobado leyes tendientes a proteger la cultura y costumbres indígenas, la aplicación de las mismas en Tribunales penales en los casos que nos convocan, distan de auspiciar un pronóstico favorable tendiente a enfrentar este conflicto de manera permisiva. Tampoco para el legislador es una cuestión de urgencia, por el contrario, el único proyecto de ley existente en Chile, cuya finalidad es regular el derecho sin distinción de persona a portar, usar, transportar, adquirir, suministrar, poseer y consumir hoja de coca en estado seco, sin que se configure responsabilidad penal, es la moción establecida en el boletín N°16381, la cual ingresó a tramitación el año 2023 y sigue en primer trámite constitucional, sin muchas luces de aprobación.

ANEXO

Artículo 1 de la Ley N°19.253: El Estado reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y cultura.

El Estado reconoce como principales pueblos o etnias indígenas de Chile a los Mapuche, Aimara, Rapa Nui o Pascuense; Atacameño, Quechua, Colla, Diaguita, Chango del norte del país; Kawashkar o Alacalufe y Yámana o Yagán de los canales australes; y Selk'nam. El Estado valora su existencia por ser parte esencial de las raíces de la nación chilena, así como su integridad y desarrollo, de acuerdo con sus costumbres y valores.

Es deber de la sociedad en general y del Estado en particular, a través de sus instituciones respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación.

Artículo 54 de la Ley N°19.253: La costumbre hecha valer en juicio entre indígenas pertenecientes a una misma etnia, constituirá derecho, siempre que no sea incompatible con la Constitución Política de la República. En lo penal se la considerará cuando ello pudiere servir como antecedente para la aplicación de una eximente o atenuante de responsabilidad.

Cuando la costumbre deba ser acreditada en juicio podrá probarse por todos los medios que franquea la ley y, especialmente, por un informe pericial que deberá evacuar la Corporación a requerimiento del Tribunal..”.

Artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.

Artículo 40 de la Declaración de las Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas: Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de conflictos y controversias con los Estados u otras partes, y a una pronta decisión sobre esas controversias, así como a una reparación efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y colectivos. En esas decisiones se tendrán debidamente en consideración las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados y las normas internacionales de derechos humanos.

Artículo 2 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo

1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.

2. Esta acción deberá incluir medidas:... b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones;..”

Artículo 5 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo: Al aplicar las disposiciones del presente Convenio:

a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente;

b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos;

c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo.

Artículo 8 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo:

1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.

2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio.

3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes.